

C.A. de Santiago

Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

A los folios 14 y 15: téngase presente.

**Vistos:**

Por sentencia de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-1575-2021, se acogió parcialmente la demanda de despido improcedente y cobro de prestaciones laborales, interpuesta por Tatiana Osiadacz Matic en contra de Banco Security S.A., declarando que el despido de la actora fue injustificado, condenando a la demandada al pago del recargo legal de un 30% de la indemnización por años de servicios y se rechaza la demanda en lo que referido a la devolución de la suma de \$1.220.980, por concepto de aporte del empleador al Seguro de Cesantía en AFC; sin costas.

Contra esa sentencia la parte demandante dedujo recurso de nulidad, fundado en la causal única del artículo 477, segunda hipótesis del Código del Trabajo.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los apoderados de las partes.

**Considerando:**

**Primero:** Que la demandante hace valer la causal del artículo 477, inciso 1°, segunda hipótesis del Código del Trabajo, esto es, infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, la que recae en infracción del artículo 13 de la Ley N° 19.728.

Argumenta que el sentenciador incurre en la infracción de ley denunciada en el considerando noveno de la sentencia, al no conceder la devolución del aporte del empleador al seguro de cesantía.

Sostiene el legislador autoriza al empleador para imputar las cotizaciones efectuadas más su rentabilidad, en el caso de



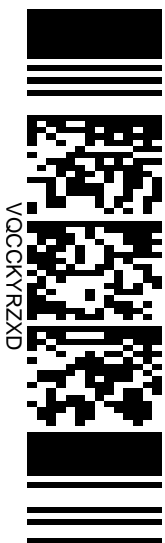
que el despido se fuera por las causales del artículo 161 del Código del Trabajo, sin embargo, en el caso de autos, el término del contrato por supuestas “necesidades de la empresa” fue declarado Improcedente o injustificado por el tribunal, lo cual además hace evidente que el fundamento del despido no cumpliría tal condición de necesidades de la empresa, ya que el despido simplemente no tuvo fundamento en las casuales que prevé el artículo 13 de la Ley N° 19.728. Cita jurisprudencia en apoyo de su posición.

Solicita que se invalide la sentencia, dictándose una de reemplazo que devuelva a su parte el monto descontado e imputado por la demandada por \$1.220.980, más reajustes e intereses por concepto de descuento aporte del empleador a la Administradora de Fondo de Cesantía, con costas, de estimarse procedente.

**Segundo:** Que, como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se ha tenido por probados.

**Tercero:** Que el citado artículo 13 de la Ley N° 19.728, establece que: *“Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios...”*, agregando el inciso segundo que *“se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía...”*.

**Cuarto:** Que, del simple tenor de la regla antes transcrita, se desprende que, para que ella opere, es necesario que el descuento del saldo de la cuenta individual del trabajador por



cesantía se haya debido efectivamente a las necesidades de la empresa.

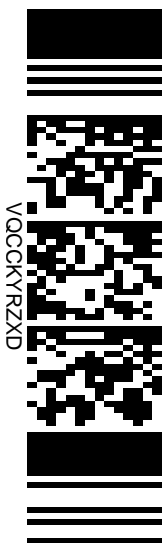
Por ende, si el trabajador ha recurrido a la justicia para que se pronuncie sobre la validez de esa causal de término de los servicios, en relación con el recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios y de la restitución de esos fondos descontados en el finiquito, los efectos que se derivan de aquella pretensión quedan en suspenso hasta la decisión jurisdiccional.

Ahora bien, si el juez determina que no se ha probado debidamente las necesidades de la empresa para despedir al trabajador y declara que el despido de éste es improcedente -como ocurre en la especie- no puede tener lugar la imputación referida en el inciso segundo del precepto precitado, ya que esa deducción está sujeta a la condición de haber operado efectivamente la causal de necesidades de la empresa.

Pensar lo contrario implicaría que al empleador le basta invocar esta causal para que se aplique el descuento, olvidando que esa determinación puede ser objeto de revisión por la justicia a requerimiento de los trabajadores, quienes accionan motivados por lo que estiman una vulneración de sus derechos, los que son irrenunciables.

Este predicamento, por lo demás, se refuerza en el inciso 2° del artículo 52 de la Ley N° 19.728, toda vez que al acogerse la demanda del trabajador, declarando el despido improcedente, dicha disposición establece que el tribunal *“deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones que corresponden conforme al artículo 13”*, referencia que debe entenderse hecha al inciso primero de este último precepto, pues el pretendido descuento obviamente no es el pago de las prestaciones, sino una merma de las mismas.

Por último, admitir lo contrario también significaría que la decisión jurisdiccional en cuanto declara injustificado o



improcedente el despido carece de eficacia, lo que es un evidente contrasentido, ya que al no haber operado la causal invocada por el empleador para despedir al trabajador, los efectos que pudiera haber generado ese término de servicios deben retrotraerse a su estado anterior, razón por lo que es del todo procedente restituir el dinero que se ha descontado indebidamente a la trabajadora.

**Quinto:** En tal virtud, al razonar la sentencia en el motivo noveno, que no procede la devolución del aporte del empleador a la AFC, ha incurrido en infracción de ley, pues no ha dado correcta aplicación al artículo 13 de la Ley N° 19.728, lo que desencadena que la causal de infracción de ley, en su modalidad de falsa aplicación de la norma, debe ser acogida, en la forma que se indicará en lo dispositivo.

Por los motivos anteriores, más lo previsto en los artículos 477, 479, 481 y 482 del Código del Trabajo y artículos 13 y 52 de la Ley N° 19.728, **se acoge** el recurso de nulidad interpuesto por la demandante en contra de la sentencia de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-1575-2021, la que **se invalida**, sólo en la parte que desestimó la restitución de los fondos por AFC a la demandante, dictándose a continuación, y sin previa vista, la correspondiente sentencia de reemplazo.

**Regístrese y comuníquese.**

**Laboral-Cobranza N° 2832-2021.**

Pronunciada por la Duodécima Sala, integrada por el Ministro (S) señor Alejandro Aguilar Brevis, la Fiscal Judicial señora Ana María Hernández Medina y el Abogado Integrante señor Francisco Javier Ovalle Aldunate.



En Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

ALEJANDRO CLAUDIO AGUILAR  
BREVIS  
MINISTRO(S)  
Fecha: 05/11/2021 10:46:16

ANA MARIA ANTONIETA  
HERNANDEZ MEDINA  
FISCAL  
Fecha: 05/11/2021 10:53:29

FRANCISCO JAVIER OVALLE  
ALDUNATE  
ABOGADO  
Fecha: 05/11/2021 10:43:17



Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Suplente Alejandro Aguilar B., Fiscal Judicial Ana Maria Hernandez M. y Abogado Integrante Francisco Javier Ovalle A. Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.

C.A. de Santiago

Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 478 inciso 2° del Código del Trabajo se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

**Vistos:**

Atendido el motivo para acoger el recurso de nulidad de la parte demandante, se mantiene la sentencia anulada en todo lo no afectado, de modo tal que se prescinde solamente del considerando noveno.

**Y teniendo, además, en su lugar presente:**

1°) Los considerandos tercero y cuarto de la sentencia de nulidad, que se dan por expresamente reproducidos y;

2°) Que al haberse concluido que el despido del cual fue objeto la demandante es injustificado, procede acceder a la restitución de los fondos del seguro de cesantía -descontados por la demandada en la indemnización por años de servicios- solicitado por la trabajadora en su demanda, tal como se colige de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 19.728, los que ascienden a la suma de \$1.220.980.

Por los fundamentos anteriores, más lo dispuesto en los artículos 161, 477 y 482 del Código del Trabajo y artículos 13 y 52 de la Ley N° 19.728, **manteniendo** lo resuelto en los numerales I, II y V, de la sentencia de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-1575-2021, se declara que, además, **se condena** la demandada Banco Security S.A., al pago de la suma de \$1.220.980 (un millón doscientos veinte mil novecientos ochenta pesos), a la actora Tatiana Osiadacz Matic, por concepto de restitución del descuento en la indemnización por años de servicios, correspondiente al aporte



de seguro de cesantía, más reajustes e intereses que correspondan.

Asimismo, atendido lo resuelto en el numeral IV de la sentencia anulada, se modifica el fundamento de la exención de costas de la demandada, teniendo en consideración únicamente que tuvo motivo plausible para litigar.

**Regístrese y comuníquese.**

Nº Laboral - Cobranza-2832-2021.

Pronunciada por la Duodécima Sala, integrada por el Ministro (S) señor Alejandro Aguilar Brevis, la Fiscal Judicial señora Ana María Hernández Medina y el Abogado Integrante señor Francisco Javier Ovalle Aldunate.

En Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

ALEJANDRO CLAUDIO AGUILAR  
BREVIS  
MINISTRO(S)  
Fecha: 05/11/2021 10:46:19

ANA MARIA ANTONIETA  
HERNANDEZ MEDINA  
FISCAL  
Fecha: 05/11/2021 10:53:36

FRANCISCO JAVIER OVALLE  
ALDUNATE  
ABOGADO  
Fecha: 05/11/2021 10:43:19





Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Suplente Alejandro Aguilar B., Fiscal Judicial Ana Maria Hernandez M. y Abogado Integrante Francisco Javier Ovalle A. Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.